



Contratistas internacionales participaron en la (pre)fabricaci3n de elefantes blancos

Descripci3n

El presidente venezolano, Nicol3s Maduro, ha sido enf3tico al afirmar en repetidas ocasiones durante las 3ltimas semanas, justo cuando las estrecheces en el flujo de caja empiezan a apretar las cuentas p3blicas, cosas como esta: "Por cada apartamento que recibe una familia, hay 60.000 d3lares, quiz3s m3s".

Que la cuenta est3 expresada en d3lares no es casualidad. Como admite el propio presidente, son importados al menos 40 por ciento de los componentes de una vivienda t3pica construida para las misiones del Gobierno. Adem3s, buena parte de estos programas dependen de una "solidaridad" internacional muy bien remunerada con petrod3lares. Desconfiados, por su agenda pol3tica, del sector venezolano de la construcci3n, Hugo Ch3vez y su sucesor, Maduro, prefirieron asignar los grandes proyectos de vivienda a empresas privadas o estatales de "pa3ses amigos", como China, Rusia, Bielorrusia, Ir3n y Uruguay.

Pero los convenios internacionales para la construcci3n de casas prefabricadas, una de las alternativas a las que el Gobierno chavista ha echado mano como respuesta r3pida al d3ficit habitacional en Venezuela, no han funcionado del todo: los incumplimientos de contratistas extranjeras y las fallas de planificaci3n, control y seguimiento de parte de las autoridades venezolanas, han dejado como resultado muchas vigas y pocos techos, y amplios terrenos desmalezados sin viviendas. Para esta fecha, deb3an estar listas m3s de 30.000 casas de ese tipo a trav3s de la ejecuci3n de cuatro alianzas binacionales, pero hoy los avances no alcanzan ni la cuarta parte de lo estipulado.

Los ingentes recursos en juego, la fr3gil contralor3a, el apremio y la asignaci3n de proyectos a dedo, conformaron juntos un bocado jugoso para la corrupci3n.

Nada m3s en marzo pasado, en el marco de las indagaciones que autoridades espa3olas adelantan por el presunto lavado de dineros negros por parte de exfuncionarios venezolanos en la Banca PrivatD3Andorra y su filial Banco Madrid, el nombre de la contratista Essentium figur3 en un reportaje del diario espa3ol *El Confidencial* que cita a la compa3a, con base en un informe de inteligencia de junio de 2013 de la Polic3a Nacional de ese pa3s, de pagar comisiones millonarias

para la adjudicación de contratos públicos de construcción en Venezuela. "Los movimientos bancarios sin duda evidencian el uso de maniobras habituales de blanqueo", afirma el diario, citando a una fuente.

Essentium es un conglomerado de cementeras y materiales para la construcción, que se ha extendido al sector inmobiliario en años recientes. A su cabeza aparece Susana Monje, hija del empresario Valentín Monje, ambos "siempre según los medios españoles" fichas cercanas al clan de Jordi Puyol, el presidente de la Generalitat catalana que ahora pasa apuros bajo señalamientos de evasión de impuestos y corrupción. Susana Monje es además tesorera del FC Barcelona y considerada mano derecha de Sandro Rosell, ex presidente del Barça, procesado ahora por el llamado Caso Neymar y señalado por prácticas corruptas, en combinación con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Texeira, cuando Rosell fue presidente de la marca deportiva Nike en Brasil.

Essentium consiguió un contrato a finales de 2011 para la fabricación de 3.662 viviendas de interés social en Santa Teresa del Tuy (estado Miranda). Solo durante tres meses de 2012, *El Confidencial* rastreó depósitos de Pdvsa, la estatal petrolera venezolana, a una cuenta de Essentium en el Banco Sabadell de Cataluña por 92,6 millones de dólares.



"Por cada apartamento que recibe una familia hay 60.000 dólares, quizás más", reiteró Maduro esta semana sobre los programas de viviendas de su gobierno. Foto: Flickr/Cancillería Venezuela.

Pero de esas viviendas, que según el contrato debieron estar terminadas para mediados de 2013, hoy solo hay un poco más de 200 construidas en el sector El Triplex de los Valles del Tuy, como admite el ministerio del Área en declaraciones oficiales.

Essentium también figura en el informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) de España "cuyo contenido se filtró por varios medios

español como fuente de sobornos para ex funcionarios venezolanos, como el ex director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Carlos Aguilera, de hasta 4,8 por ciento del costo de un contrato para la rehabilitación de la Línea 1 del Metro de Caracas.

El caso no está siendo visto por la justicia venezolana. Por ahora apenas aflora en la prensa española. Pero, entre tanto, otros proyectos para la fabricación rápida de casas, con contratistas internacionales, se han convertido en prematuros elefantes blancos, en motivo de frustración para las familias que esperaban contar con viviendas propias, y en materia de atención para organismos jurisdiccionales en Venezuela.

De la Banda Oriental a la nada

Una de estas historias empieza en Tinaquillo, estado Cojedes en la región llanera central del país, patria chica de la *primera combatiente*, Cilia Flores, donde el expresidente Hugo Chávez presentaba casi una década el primer modelo de casa uruguaya prefabricada como una solución para el déficit habitacional.

Hoy, voceros comunitarios de la localidad como Martín Garza, del Observatorio Cojedeño de la Violencia, y el concejal Juan Carlos Villegas, dan testimonio del cementerio de casas incompletas en distintas zonas de la entidad, a la vista de todos, como recuerdo de la promesa de las 12.193 viviendas que la empresa uruguaya Unión Metalúrgica Industrial del Sur S. A. (Umissa) debía instalar en territorio venezolano. «Nosotros las llamamos *las casas de cartón*», dice Garza, quien denuncia el agrietamiento de algunas. La propia gobernadora de Cojedes, Árika Farías, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se vio en la obligación, en agosto de 2014, de anunciar la refacción de las pocas unidades que se levantaron bajo el proyecto. «Fueron 500 casas que se iban a hacer, se concretaron 300 y quedaron un conjunto de familias sin la casa y otras con la casa mal hecha (¿?) Ya hoy están reconstruyéndose 278 y vamos a seguir porque lo hemos asumido como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela», declaró. Tres años antes, el discurso oficial garantizaba calidad: María Elena Villaquirán, presidenta del Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (Indhur) de Cojedes, destacaba la adaptabilidad al clima y durabilidad de los kits uruguayos.

El acuerdo binacional fue anunciado por el Gobierno en 2006 para su ejecución en distintas regiones del país, en el marco de la campaña de sustitución de ranchos por «casas dignas». Cojedes, una de las regiones más pobres del país, sería el epicentro de la experiencia.

El Registro Nacional de Contratistas del Estado (RNC) reporta trabajos incompletos de instalación de viviendas con material uruguayo, principalmente por parte de empresas que funcionan bajo la figura de cooperativas. Benjamín Villegas, representante de la Asociación Cooperativa Constructrans del Sur, del estado Apure (llanos suroccidentales de Venezuela), asegura que la instalación de cada casa tardaba, en los planes, aproximadamente 22 días, pero que ellos recibían la totalidad de las piezas con tres o cuatro meses de retardo. Manuel Velázquez, de la Cooperativa Lovirpa, explica algunos cambios en el proceso ante ese problema, como el uso de techos nacionales de acerolit (lámina compuesta por dos películas de aluminio y asfalto líquido) para sustituir las tejas uruguayas que no llegaron. «Faltaron piezas de baño y hubo que adaptarles otras. También tuvimos que mandar a hacer nosotros las tapajuntas, que son como una chapa de madera que se coloca en forma de

columna donde coinciden las paredes?•, explica.

Ambas experiencias corresponden a contratos desarrollados entre 2011 y 2012, aunque el problema se advertía desde 2009, cuando la Contraloría General de la República (CGR) develó que solo 11 de los 12.000 kits habían sido entregados pese al desembolso de 45,47 por ciento de los recursos. No había documentación suficiente sobre el avance del proyecto, ni coordinación entre el Ministerio de Vivienda y Hábitat, y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), para la nacionalización de la mercancía. La Contraloría determinó, además, debilidades de planificación, seguimiento y control técnico-administrativo de las contrataciones y de la ejecución de los proyectos. Por eso, contratos como el de la construcción de 260 viviendas en Charallave y Santa Lucía (estado Miranda, en el centro norte del país), 130 en cada zona, que se desarrollaban a finales de 2011, solo fueron ejecutados en 25 por ciento, en un caso, y un magro uno por ciento en el otro.

La cantidad de viviendas prefabricadas que el contratista uruguayo debía entregar se ajustó entonces a la baja, de 12.000 a 8.110 kits, por medio del Addendum III al contrato, incorporado el 14 de agosto de 2009. Sin embargo, se conservaba el monto inicial de la inversión, 155 millones 467 mil dólares, bajo el compromiso de que Umissa asumiera el desembarque, transporte, almacenamiento, distribución y asesoramiento de montaje de los kits. Pero la Contraloría General de la República hizo un nuevo llamado de atención por ineficiencia en su informe de 2013: para 2011, año de culminación del contrato, solo 7.180 kits habían sido entregados y la mayoría, 5.030 de ellos, estaban incompletos. Al momento de la fiscalización, apenas 1.473 viviendas estaban terminadas. La inspección también halló losas incompletas con fisuras y granos, y materiales deteriorados e inservibles. Frente a este panorama, el Ministerio de Vivienda y Hábitat rescindió unilateralmente el contrato en julio de 2013, aunque la contratista uruguaya defendió su participación ante los medios a través de su gerente general, Gastón Tealdi, alegando retrasos portuarios y de instalación de los kits en Venezuela. El Estado gastó 122 millones de dólares casi 80 por ciento del pago en un acuerdo incompleto con viviendas de mala calidad.



Chávez presentó hace casi una década el primer modelo de casa uruguaya prefabricada como una solución para el déficit habitacional, pero las pocas que construyeron en Cojedes quedaron con el nombre de "casas de cartón". Foto: Cortesía Martán Rolando Garza.

Las consideraciones del vocero uruguayo no estaban del todo desatinadas. Si bien la Memoria y Cuenta de 2010 del Ministerio de Vivienda y Hábitat garantizaba nuevos mecanismos para el retiro oportuno de los contenedores del puerto, el documento reconoció otras fallas de planificación de parte de Venezuela: algunos de los terrenos seleccionados para la colocación de las viviendas no tenían la capacidad de albergar la cantidad estipulada y en otros casos requerían una adecuación previa, lo cual no estaba incluido en el presupuesto ni en los cronogramas, y retrasaba la continuidad de las obras.

Los iraníes se vistieron de canadienses

A pocos kilómetros de los vestigios del frustrado convenio con Uruguay, en la misma población de Tinaquillo, fue inaugurada en 2012 una planta de estructuras metálicas para la construcción de unidades habitacionales, en el marco de una alianza con la República Islámica de Irán. ¿De la

fabrica sale el kit completo de acero galvanizado para viviendas de 80 metros cuadrados», explicaba entonces el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, hoy vicepresidente para la Planificación y el Conocimiento, y marido de la directora del canal TeleSur, la periodista colombiana Patricia Villegas.

Esta planta y otras dos más ubicadas en Cabimas, estado Zulia (sobre la costa oriental del Lago de Maracaibo), y Temblador, estado Monagas (llanos orientales de Venezuela), instaladas bajo el amparo de un acuerdo de 14,1 millones de dólares, debían producir 8.544 kits de viviendas para septiembre de 2013, pero el informe de 2014 de la Contraloría General de la República precisó que solo se produjeron 180, o solo dos de cada 100 planificadas. A Tony Tovar, abogado de la empresa canadiense Novatech, no le sorprende el déficit: hace un año había denunciado la adquisición irregular de equipos para estas plantas por parte del Estado venezolano a través de la compañía contratista iraní Tarasazeh Tabriz.

En febrero de 2012 Tarasazeh subcontrató a la canadiense Novatech para el suministro de equipos para las tres fábricas, por 3,5 millones de dólares, de los que la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela S. A. (Corpivensa) transfirió, ese mismo año, 2,8 millones de dólares de manera directa a Novatech. Y no hubo pago: los socios de Tarasazeh decidieron rescindir el contrato y pedir la devolución del monto depositado, medida rechazada por los canadienses, quienes abogan por finiquitar el acuerdo. La disputa está hoy a cargo de la justicia venezolana, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitiera en mayo de 2012 una querrela en contra del presidente de Novatech. Tovar asegura que los cambios en las negociaciones de Tarasazeh obedecieron al propósito de la contratista iraní de adquirir otros equipos obsoletos, a menor costo.

Hamid Fazel, representante de Tarasazeh Tabriz, afirmó a finales de 2013 al diario *El Universal* que su empresa había traído al país equipos iraníes para la edificación de las plantas y que su traslado supuso escalas en Turquía, Alemania y Estados Unidos. Pero una serie de [facturas](#) exponen otra cosa: maquinarias y piezas metálicas fueron compradas por la contratista persa a la compañía canadiense Industrial Equipment Designs Inc. para Corpivensa. El director de esa empresa, Dinesh Mangal, confirmó, vía telefónica, la venta para Venezuela «a través de Tarasazeh» de equipos para la construcción de viviendas en 2012, pero no dio mayores detalles: «Toda la información sobre el contrato es confidencial. Si necesita información acerca de la maquinaria y el precio, por favor póngase en contacto con el señor Fazel». Se envió una petición de entrevista al representante iraní, que no obtuvo respuesta.

La irregularidad de esas adquisiciones se vislumbraba ya en agosto de 2012, cuando la coordinadora de importaciones de Corpivensa envió un correo electrónico a la abogada de Tarasazeh, preocupada «decía en el comunicado» por el arribo a Puerto Cabello (principal puerto de Venezuela, en el estado Carabobo, centro-norte del país) de contenedores sin la debida documentación. Los equipos fueron transportados, según [facturas de embarque](#), por vía marítima desde Toronto (Ontario, Canadá), a pesar de que la empresa iraní pidió en mayo de 2012 un anticipo de 20 por ciento del contrato por el alegado traslado aéreo de la mercancía. En total, fueron [tres envíos](#), con dos contenedores cada uno, desde Canadá hacia Venezuela.



El gobierno venezolano ha encargado la construcción de viviendas a contratistas extranjeras de España, Irán, Portugal y Uruguay. Ninguna ha cumplido su compromiso. Foto: Minci.

Hoy las plantas construidas con esos materiales no producen ni cerca de lo prometido, 60.000 viviendas al año. La Contraloría, por su parte, encontró fallas en materia de ingeniería y operación de las máquinas. ¿No se cumplió con las fechas programadas para el suministro, instalación y puesta en marcha de la línea LSF en la planta Los Cabimos y de las otras dos plantas, Tinaquillo y Leonarda Rivas, no se generaron actas de control perceptivo al momento de recibir los equipos, ni se definieron hitos de control para el seguimiento de la ejecución física de la instalación de las líneas de producción?, señala el reporte de la Contraloría General de la República de 2014.

Mientras tanto, el abogado Tovar insiste ante Corpivensa para que reciba las máquinas ya pagadas en 80 por ciento de su cliente, la canadiense Novatech. ¿Nosotros queremos terminar nuestro trabajo, pero sabemos que recibir estos equipos será reconocer que los otros no sirven?, dice.

La apuesta lusa

En los Valles del Tuy del estado Miranda región que se ha convertido en aliviadero industrial y ciudad dormitorio de Caracas, a una hora de la capital venezolana, el gobierno inició en 2011 la construcción de 12.512 viviendas y dos plantas de elementos prefabricados, esta vez con un aliado europeo: Portugal. Las fábricas fueron inauguradas al año siguiente con una capacidad de producción de paneles y losas suficientes para el levantamiento de 8.500 viviendas al año, según reportes del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Pero la primera meta de construcción de casas no se cumple: el Registro Nacional de Contratistas apunta un avance de apenas 33 por ciento de los

trabajos, aunque su fecha prevista de culminación era noviembre de 2014. Los proyectos habitacionales consisten en 4.260 viviendas para el conjunto Ciudad Zamora, en Cúa, y 8.260 para el conjunto Lomas de Guadalupe, en Ocumare del Tuy. En 2014, el Grupo Lena —que ha aparecido en la prensa portuguesa en vinculación con el escándalo de presuntos pagos furtivos al ex premier José Sócrates— entregó 1.260 apartamentos entre los dos urbanismos, que, junto a los 840 completados en 2013, suman 2.100 viviendas listas.

El retraso, según el director general de la compañía portuguesa Grupo Lena, Cardoso Marques, se debe a problemas iniciales con la adquisición de cemento y a retardos en los pagos del gobierno. —Pero ya está todo controlado. Avanzamos a buen ritmo. Tenemos una relación muy cercana con el ministerio y con Pdvsa—, afirma Marques. La máxima compañía estatal, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue contratada por el Ministerio de Vivienda y Hábitat para el seguimiento de las obras. —Siempre hay problemas, pero nuestro foco es reducirlos. Una cosa es discutir sobre los problemas y otra es solventarlos—, dice el ejecutivo, que calcula la culminación de todos los edificios para mediados de 2017.

La alianza Venezuela-Portugal, que desde 2008 planteaba inicialmente el levantamiento de 50.000 apartamentos por el Grupo Lena, fue ciertamente promovida por el ex presidente Hugo Chávez y el ex primer ministro portugués, José Sócrates, este último detenido a finales de 2014 por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. Otra sombra de la relación bilateral fue la detención del ex administrador del Grupo Lena, Carlos Santos Silva, por el mismo caso. La empresa manifestó entonces en un comunicado que eso no tenía por qué afectar ni su imagen ni sus trabajos.



José Sócrates, ex primer ministro de Portugal, se encuentra preso por un caso de corrupción, que involucra a uno de los directivos de la constructora lusa que Venezuela encargó dos urbanismos en el estado Miranda. Foto:Flickr.

Fecha de creación

2015/04/18

armando.info